

## MOVIMIENTOS SOCIALES Y DEMOCRACIA EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

*Social Movements and Democracy in Contemporary Mexico*

*René Torres-Ruiz*

### **René Torres-Ruiz**

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor-investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus principales líneas de investigación son: 1) Democracia y ciudadanía; 2) actores y movimientos sociales; 3) cambio político y participación; y 4) democracia, partidos políticos y sistema electoral. Es profesor de asignatura en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre sus últimas publicaciones destacan: *El sendero democrático. El PRD a través de las elecciones presidenciales, 1988-2018* (en prensa); *Reflexiones en torno a la Ciencia Política y la política en América Latina* (2019); *Surcando la democracia: México y sus realidades* (2015); y *Procesos socioculturales y políticos. Actores, ciudadanía y democracia* (2015). Correo electrónico: rene.torres@ibero.mx.

### **Resumen**

**E**ste artículo tiene por objeto describir y analizar de manera general la aparición de ciertos grupos y colectivos sociales en el horizonte político mexicano a partir del año 2000, exigiendo distintos derechos y libertades y, al mismo tiempo, la solución por

parte del gobierno federal a diversas problemáticas específicas. En el México contemporáneo han ocurrido dos procesos, por lo menos, que corren en paralelo. Un país en donde la alternancia en la presidencia de la República ocurrida en el año 2000 marcó un cierto progreso en materia electoral; y a la par otro país lleno de pobreza, desigualdad, olvido y maltrato a minorías, violación de derechos humanos, violencia, connivencias entre poderes fácticos y candidatos del *establishment*. A partir de estos hechos surgen en México diversas manifestaciones que protestan y exigen un Estado de derecho, condiciones dignas de existencia, solución a problemas como la pobreza y la desigualdad, el alto a la violencia.

**Palabras claves:** México, democracia, movimientos sociales, protestas sociales, resistencias.

### **Abstract**

*The purpose of this article is to describe and analyse the appearance of some social groups and collectives on the Mexican political horizon from the year 2000, demanding several*

*rights and freedoms and, at the same time, the solution of different specific issues. In contemporary Mexico, two processes have occurred, at least, that run in parallel. A country where the alternation in the presidency of the Republic occurred in the year 2000 indicated some progress in electoral matters; and yet another country full of poverty, inequality, forgetfulness and mistreatment of minorities, human rights violations, violence, collusion between factual powers and establishment electoral candidates. From these events rise in Mexico various manifestations that protest and demand a rule of law, conditions worthy of existence, solution to problems such as poverty and inequality, the stop to violence.*

**Keywords:** *Mexico, democracy, social movements, social protests, resistances.*

### **Introducción**

En los últimos lustros (del 2000 al 2017) el llamado periodo de la postransición con el que se suponía que México había arribado a la democracia una vez que se dio la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, con el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) y la derrota del otrora partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han emergido en México movimientos sociales que han mostrado una gran capacidad de resistencia, movilización y lucha social, y una enorme destreza e inventiva para innovar en cuanto a repertorios de movilización y a sus estrategias para la disputa. Sin embargo, ese enorme caudal de inconformidad y malestar social, esas oleadas de movilización, protesta y rebeldía, o como dirá Tarrow (2009), esos “ciclos generales de acción colectiva” se han encontrado de frente con los llamados “poderes fácticos” y con un Estado capaz de resistir para impedir una profundización democrática que permita el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía (políticos, sociales, económicos, culturales, sexuales, medioambientales, etcétera) que en más de una ocasión han sido los detonantes de las distintas movilizaciones y protestas.

Dicho de otra manera, esos movimientos de protesta social surgidos en México en los primeros lustros del siglo XXI (el zapatismo, las protestas antidesafuero del 2005, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca-APPO, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad-MPID, el movimiento estudiantil #YoSoy132, o las jornadas por Ayotzinapa, entre otras) obedecen a distintas causas, algunas de las cuales son reivindicaciones de la identidad cultural y la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas y su autonomía; otras veces responden a problemas

político-electorales, o bien son protestas antisistémicas, expresiones contra la violencia, o exigencia de derechos específicos, demandas estudiantiles que muestran molestia e indignación con la actuación de algunos poderes fácticos o frente a omisiones o connivencias del Estado; o bien, frente a políticos en torno a los cuales se construye una imagen ficticia, haciéndolos parecer un “rockstar” y los salvadores y constructores de un nuevo país, como sucedió en el 2012 durante el proceso electoral de aquel año ante la aparición del movimiento estudiantil #YoSoy132.

Hoy más que nunca, los movimientos sociales, tanto en México como en distintas latitudes de la geografía mundial, se caracterizan por cuestionar abiertamente el poder establecido en un contexto de globalización económica de corte neoliberal que abre cada vez más la brecha entre quienes detentan el poder económico y obtienen grandes beneficios; y entre quienes tienen muy poco y apenas les alcanza para la sobrevivencia, construyendo así sociedades sumamente inequitativas en donde la pobreza y la extrema pobreza imperan, donde se lacera a millones de seres humanos; donde la desnutrición infantil es extenuante e impide o dificulta pensar en un futuro promisorio para las sociedades que la experimentan; donde el desempleo crece por la aplicación de políticas neoliberales inhumanas, y las enfermedades, muchas veces curables, matan a miles o cientos de miles de niños, mujeres, indígenas, ancianos.

Todos estos movimientos sociales, nos dice Holloway (2017), son luchas, son gritos, son rabias, son proyecciones de esperanza desde la desesperación, desde un mundo donde parece que ya no hay esperanza. Todos estos movimientos —continúa diciendo Holloway— son gritos al cielo desde la profundidad de la tormenta que estamos viviendo, son acciones colectivas de resistencia y también muchas veces de rebeldía. Estos movimientos de resistencia son un polo de un antagonismo, son respuestas a una agresión constante y violenta. Esa agresión tiene un nombre: el Capital; esa forma actual de organización social que tiene su fundamento en la mediación de las relaciones sociales a través del dinero. Esa violencia que proviene del capitalismo levanta voces de protesta, de indignación y reclamo. Así aparecen los zapatistas, Cherán, la APPO, Ayotzinapa; nombres que “resuenan en el mundo entero, cantando la canción de la rebeldía. Una canción que viene de un mundo que todavía no es, pero que podría llegar a ser o tal vez no” (Holloway, 2017: 6).

Estos movimientos también representan el inicio de la lucha por fundar un sistema político auténticamente democrático; son resultado de grupos sociales, jóvenes, indígenas, estudiantes, campesinos, trabajadores de la educación, profesionistas, mujeres que han intentado imaginar un México sin simulaciones, que se han esforzado por desvelar un sistema autoritario cubierto con un velo democrático. Estas movilizaciones buscan construir un sistema sin autoritarismos, sin represiones ni

violencia. Intentan, al mismo tiempo, abrir canales democráticos de comunicación e interlocución mucho más horizontales entre gobernantes y gobernados; ampliar el acotado espectro de la participación ciudadana, de la deliberación. Son movimientos, pues, que constituyen un fuerte viraje en lo que se refiere a la cultura política, a las prácticas, a la manera tradicional en que se ha hecho política.

Son acciones colectivas de tipo contencioso, consisten en “acontecimientos en los que algunas personas se reúnen en un lugar públicamente accesible y, de palabra o, de hecho, realizan reclamaciones contra otros, reclamaciones que, de llevarse a cabo, afectarían a los intereses de esos otros” (Tilly, 1990: 169).

Charles Tilly nos dice que los movimientos sociales se caracterizan por articular tres componentes:

1) son campañas de reclamos colectivos a las autoridades; 2) un conjunto de actividades que incluyen formación de asociaciones con objetivos especiales, mítines, declaraciones a los medios y manifestaciones; y 3) representaciones públicas de la dignidad, unidad, número y compromiso de la causa (Tilly, 2004: 7; citado en Ortega, 2010: 242).

En efecto, las distintas acciones colectivas que se han desplegado en México del 2000 en adelante, a las que recién me referí, reúnen estos elementos. Empero, no todas han tenido respuestas satisfactorias por parte del Estado. Unas dan la impresión de haber fracasado en el intento por cambiar la sociedad o mejorarla; otras parecen haber logrado, aunque sea parcialmente, sus cometidos; unas más se disolvieron sin pena ni gloria, y algunas otras han sido víctimas de la represión desmedida por parte de los gobiernos. Pero todas tienen algo en común: han hecho frente a estructuras anquilosadas y jactanciosas que muestran una enorme resistencia frente a esas presiones provenientes de la sociedad. Todas estas expresiones de inconformidad se enfrentan a elites políticas que se resisten a modificar sus prácticas indebidas y abusivas en cuanto al ejercicio de poder. Esto es más o menos un fenómeno común, no privativo de México porque, como nos dice Tarrow “las elites políticas no responden a las exigencias de cualquier grupo, movimiento o individuo, sino al grado de turbulencia generado y a las demandas planteadas por elites y grupos de opinión que sólo se corresponden parcialmente con las exigencias planteadas por aquellos a quienes dicen representar” (Tarrow, 2009: 52).

Así, esas estructuras de poder resisten, pero a pesar de ello hay efectos de los movimientos sociales en cuanto al cambio social y político se refiere, sólo que esos cambios son en muchas

ocasiones lentos, graduales, a veces incluso imperceptibles, lo que no quiere decir que no estén ahí. Esto ocurre así, de acuerdo con Bartra, porque,

con frecuencia los movimientos sociales no alcanzan sus objetivos o lográndolos éstos se pervierten. Sin embargo, la historia avanza a través de experiencias colectivas que ocasionan quiebres; de acontecimientos decisivos que aun si en ese momento los actores movilizados no consiguen lo que expresamente se proponían, provocan fisuras en el sistema: grietas que luego se extienden y a veces terminan por colapsarlo. Así trabaja el “viejo topo”. La saga de la humanidad está empedrada de derrotas que a la postre cambiaron el rumbo de la historia (Bartra, 2019).

Pues bien, muchos de los movimientos sociales más visibles y que han tenido lugar en México en los tiempos recientes son de este tipo; no parecen haber alcanzado el triunfo en primera instancia, ni lo que se proponían de inicio. No obstante, han aportado al cambio de su sociedad, le han inyectado conciencia a la gente, han propiciado debates, han creado incentivos para que los sujetos sociales se impliquen en política, para que se aborden temas y problemáticas que antes permanecían vedados, etcétera.

### **El comienzo y el porqué del descontento social...**

Del año 2000 al 2017, el llamado periodo de la *postransición*, con el que se dijo que México alcanzaba la democracia una vez que se dio la alternancia en la presidencia de la República en el año 2000, resultado del triunfo del PAN y la derrota del PRI, emergieron en México, como ya decíamos, diversos movimientos y protestas sociales que intentaron cambiar al país en un sentido u otro. Esos movimientos sociales se caracterizaron por movilizar recursos, por poner en práctica repertorios de acción y movilización muy variados, para cuestionar abiertamente el poder establecido en un contexto de globalización económica. Un modelo económico que genera sociedades asimétricas y profundamente desiguales, en donde las condiciones de vida imperantes ignoran completamente la dignidad humana.

Además, una globalización neoliberal que genera y fomenta la violencia apoyada en un sistema de dominación que se despliega mediante distintas formas de hegemonía: una cultura determinada, una ideología “correcta”, una forma de gobierno, políticas y programas “apropiados” y una forma de Estado (Springer, 2016; citado en Salmerón, 2017: 50). Maneras todas ellas que no son otra cosa que distintas manifestaciones de la violencia, imposiciones, formas efectivamente de dominar al mundo, a los países, a los pueblos, a las culturas.

Frente a este modelo económico inhumano, que mata a millones de personas todos los años o los somete a condiciones de existencia totalmente deplorables, aparecen movimientos sociales en México exigiendo el alto de esta destrucción, porque se reconoce que sin mejorar ese aspecto de la sociedad ningún cambio será efectivamente transformador y de mejora sustantiva para la propia comunidad. Esa, la de modificar el orden económico y hacerlo más justo, no sólo más tolerable, es y ha sido una de sus principales proclamas históricas de los movimientos populares. Según nos dice Lummis:

La transformación de la sociedad, incluso la democratización de la economía. Ha sido uno de los objetivos principales de los movimientos populares desde el nacimiento del capitalismo. [...] Cualquier movimiento democrático que acepte como inalterables las condiciones fundamentales de competencia y trabajo en la economía capitalista, y que sólo busca hacer las cosas “un poco más agradables”, ha admitido la derrota desde el principio (Lummis, 2002: 50-51).

Al mismo tiempo, estos movimientos sociales del nuevo milenio, que han aparecido en México, cuestionan la instauración y funcionamiento de un modelo político, como es el de la democracia representativa de cuño liberal, que cada vez hace más patente su incapacidad, insolvencia y desinterés para resolver problemas y demandas sociales propios de nuestro tiempo (empleo, estudios, protección de los derechos humanos, identidades diversas, autonomía de grupos sociales dentro de contextos estatales, medio ambiente, transparencia, legalidad, alto a la corrupción y a la violencia en distintos planos, etcétera). Una democracia representativa en relación muy estrecha con los intereses del neoliberalismo, un modelo político que propicia gobernar en el vacío, sin un respaldo popular amplio, y que genera una profunda indiferencia hacia la política y hacia la democracia, como nos recuerda Peter Mair (2013: 20).

La democracia implementada no hace tanto tiempo en gran parte de América Latina enfrenta en nuestros días una fuerte crisis. Así como llegó acompañada de truenos y centellas, envuelta en promesas ilusionantes que generaron grandes expectativas entre importantes segmentos de las poblaciones de estos rumbos, hoy despierta, cuando menos, escepticismo, si no es que una marcada desconfianza y un abierto rechazo popular hacia los políticos, las instituciones y los gobiernos. Genera desapego, desafección o una importante indiferencia. Esto es así, entre otras cosas, porque los políticos defensores de la democracia liberal, aquellos que se dicen representantes, están cada vez más desvinculados de las situaciones vitales de los ciudadanos y sustentan su quehacer político en la corrupción, la mentira y el engaño, provocando frustración entre la población y pérdida de confianza institucional y social. Como nos dice Castells

En situación de crisis económica, social, institucional, moral, lo que era aceptado porque no había otra posibilidad, deja de serlo. Y lo que era un modelo de representación se desploma en la subjetividad de las personas. Sólo queda el poder descarnado de que las cosas son así y quien no lo acepte que salga a la calle, donde los espera la policía. Esa es la crisis de legitimidad (Castells, 2017: 17-18).

En efecto, una legitimidad de la democracia liberal que se ha desplomado. Y así, el propio Castells apunta:

Los ciudadanos votan, eligen e incluso se movilizan y entusiasman por aquellos en quienes depositan sus esperanzas, cambiando de vez en cuando, cuando la esperanza supera el miedo al cambio, que es la táctica emocional básica en el mantenimiento del poder político. Pero la decepción recurrente de esas esperanzas va erosionando la legitimidad, al tiempo que la resignación va dejando paso a la indignación cuando surge lo insoportable (Castells, 2017: 17).

De acuerdo con mi lectura de esta crisis democrática, no se trata de desaparecer la democracia representativa, aunque algunos actores sociales —que van en aumento— piensan y sostienen que hay que abandonarla, renunciar a participar en los espacios institucionales que se han construido en torno a este modelo democrático, sin darse cuenta de que proceder de esa manera es dilapidar los muy significativos logros obtenidos con la lucha social de tanto tiempo. El verdadero problema es otro, y tiene que ver con que en los tiempos recientes hay, en efecto, una crisis muy profunda de representatividad que recorre las sociedades contemporáneas, y que nos hace pensar en la conveniencia de retomar la idea de la participación y la deliberación en el ámbito público por parte de la ciudadanía, en la implicación de los actores sociales en el espacio público, en —como ha sostenido Habermas, 1998: 622— la apropiación normativa de las instituciones por parte de los ciudadanos y en que éstos ejerzan activamente sus derechos democráticos precisamente de la participación y la comunicación. O, como propone Taylor (1989: 178), no siempre ser gobernado sino también gobernar, no siempre estar abajo pero tampoco arriba; es decir, que por lo menos durante algún tiempo “nosotros” seamos los gobernantes y no siempre “ellos”. Estas ideas no renuncian a la democracia representativa, convocan más bien a enriquecerla, a mejorarla mediante la participación. Evitan el falso debate representación *versus* participación.

Ahora bien, otro aspecto importante del mal funcionamiento de las democracias representativas que tanto malestar genera, pasa por el distanciamiento de los partidos políticos de su

base social y el descuido o abandono de sus funciones tradicionales; esto es, el ser instituciones articuladoras de intereses y demandas sociales, así como el puente entre sociedad civil y Estado; fungir como canales de comunicación o ser animadores de acciones sociales, de formación política, de creación de militancia a partir de cierta ideología y prácticas, de la construcción y propuesta de un proyecto político diferenciador que busque impulsar transformaciones sociales y políticas. Los partidos de ahora son electoralistas, pragmáticos, se han desdibujado ideológicamente y se han empobrecido en cuanto al discurso y programa de acción. Son partidos *catch all* (Kirchheimer, 1980) o partidos *cartel* (Katz y Mair, 1995) que se mueven bajo la égida de las instituciones estatales y ahí quieren permanecer para conservar sus preciados intereses y sus múltiples privilegios. Muchas veces son parte del problema y no de la solución, vinculados como están al narcotráfico, a la delincuencia organizada; invadidos en su interior de prácticas antidemocráticas, son terriblemente corruptos y corruptores. Todo ello genera desmovilización, cuando en realidad un partido político debería fomentar lo contrario: la movilización política y social de los ciudadanos, su articulación, la generación de conciencia.

Esto que ocurre con los partidos políticos en el mundo y que es una de las causas de la crisis de representación, también sucede en México y ha contribuido de manera importante a la creciente movilización social.

### **Movimientos sociales en México**

En nuestros días la acción colectiva en las sociedades modernas se presenta como un reclamo de los actores sociales que se ven y se sienten afectados, desplazados por la deficiente toma de decisiones de los “políticos profesionales” que se alejan cada vez más, como decíamos, de los reclamos y necesidades de la población. En la actualidad, muchas de las movilizaciones sociales en el mundo (los indignados en España, el movimiento de resistencia *Occupy Wall Street* en Estados Unidos o el *#YoSoy132* en México, sólo por mencionar algunos) son resultado de ciudadanos deseosos de implicarse en la esfera pública, vigilar, denunciar y calificar a los tomadores de decisiones e involucrarse directamente en la toma de decisiones para romper el círculo perverso que desde hace tiempo envuelve a los ciudadanos de a pie desde el mundo de la representación. Es “la democracia de control”, dirá Rosanvallon (2007: 45-47), donde los ciudadanos deben ganar protagonismo.

En las sociedades que verdaderamente se precien de ser democráticas, la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es indispensable, se requiere de ella, no para suplantar la



democracia representativa —decir eso es caer en un falso dilema—, sino para complementarla, mejorarla y coadyuvar en la solución de los complejos problemas que aquejan a las sociedades de nuestros tiempos. En México urge una ciudadanía robusta y participativa, con la capacidad de influir en el desarrollo de la comunidad política y de la sociedad, en la construcción del bien público. Participación y representación se necesitan mutuamente para darle viabilidad y sentido a nuestra naciente democracia.

En este punto vale la pena señalar que en México, aunque se han dado en los últimos años importantes movilizaciones sociales (EZLN, APPO, MPJD, #YoSoy132, Ayotzinapa), no es la mayoría de la sociedad la que se organiza y moviliza, son sectores acotados y minoritarios que no han tenido la fuerza o la capacidad de implementar proyectos o iniciativas que permitan la confluencia de organizaciones y movimientos sociales y políticos más amplios para estructurar grandes alianzas entre diversos segmentos sociales, y que tampoco han perdurado en el tiempo lo suficiente para influir de manera inmediata en la transformación de la sociedad.

Sin embargo, algunos de esos movimientos sí han logrado aparecer con gran fuerza y arrastre, y no se han conformado sólo con cuestionar el orden establecido, por el contrario, buscan llevar sus prácticas, repertorios, recursos, experiencia e imaginación, al terreno de la propuesta, de la construcción de alternativas de solución o mejora de las vicisitudes y problemáticas variadas que afectan a la sociedad mexicana; aunque, como decía, no han sido particularmente exitosos en esos cometidos a corto plazo. Pero las posibilidades y la extensión de esos movimientos sociales y políticos en el México contemporáneo han sido muy significativas y han abierto, a la par, importantes debates, halos de solidaridad entre amplios sectores sociales (nacionales y extranjeros), mostrando gran poder de convocatoria y, generando, además, grandes expectativas entre la población. Pero también han experimentado grandes derrotas que afectan el ánimo no sólo de los militantes, sino de la población en general. A veces estos tropezones han provenido de sus propios errores, y otras, la mayoría de las veces, han sido resultado de la intervención autoritaria y abusiva por parte de los gobiernos mexicanos, tanto en el plano federal como a nivel estatal o municipal. La represión y criminalización de la protesta en México es algo que se agudiza de manera alarmante en los últimos tiempos. No obstante, como decía al inicio de este artículo, algunos de esos movimientos sociales sí han contribuido a la concientización de la sociedad y se han convertido en actores importantes en la transformación lenta y gradual de la comunidad política. Revisemos algunos de estos movimientos rápidamente.

## **El EZLN**

Los anhelos democráticos e igualitarios que han animado esas luchas han dejado, en paralelo, una estela de fracasos políticos, de sueños rotos y promesas que no han podido realizarse. Así ocurrió, por ejemplo, en el año 1994 con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).<sup>1</sup> Esto mismo ocurrió en el 2001, cuando este colectivo mayoritariamente indígena se movilizó para exigir el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena en la denominada “Caravana de la Dignidad Indígena” o “La Marcha del Color de la Tierra”.

Recordemos que el 1 de enero de 1994 surgió un movimiento armado indígena en el estado de Chiapas —el EZLN— que le declaraba la guerra al Estado mexicano, y que entre sus principales demandas se encontraba el luchar por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Igualmente, ese año entró en vigor un importante tratado comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), signado por Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México.

El 1 de enero, con el levantamiento armado del EZLN, el carismático y elocuente subcomandante insurgente Marcos declaraba frente al palacio municipal de la ciudad de San Cristóbal de las Casas:

Los compañeros decidieron alzarse este mismo día para responder al decreto de muerte que les da el Tratado de Libre Comercio (TLC), con el decreto de vida que les da alzarse en armas para exigir la libertad y la democracia que los va a llevar a la solución de sus problemas. (Suplemento Perfil de *La Jornada*, 19 de enero de 1994).

El mensaje enviado por los insurrectos era muy claro: ni modernización ni entrada al “primer mundo”, como había asegurado y proclamado fehacientemente el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La realidad del país era diametralmente opuesta: pobreza, miseria, desigualdad, marginación y negación de sus grandes mayorías, o de importantes minorías, sobre todo, de los pueblos originarios. (Torres-Ruiz, 2015: 274-275). Al respecto, Carlos Montemayor nos recuerda,

[...] la irrupción del EZLN inició el proceso de desmoronamiento de la imagen que Carlos Salinas de Gortari se había propuesto construir para su régimen. A partir del 1º de enero la imagen de estabilidad social se derrumba y la injusticia social y la miseria extrema que el EZLN denuncia en

---

<sup>1</sup> A decir de Pleyers (2018: 15), con el alzamiento zapatista surge una nueva ola de movimientos sociales globales que interpelan al neoliberalismo. Estos movimientos forman a su vez el llamado movimiento altermundista, rompiendo de esa manera con las tradicionales tipologías de los “viejos” y “nuevos” movimientos sociales.

Chiapas rompen la imagen de modernización. El TLC pasó a un segundo plano en los medios, tornando cuestionables los galardones del presidente como creador de un nuevo país. Pero sobre todo oscureció la sucesión presidencial y mostró a los partidos políticos rebasados por los movimientos sociales (Montemayor, 2009: 57).

Desde el primer momento los neozapatistas plantearon sus demandas: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (EZLN, 2003: 36). Luchaban por el reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios. El reclamo de este colectivo consistía en tener la posibilidad de vivir dignamente y dejar atrás los maltratos, injusticias, vejaciones y olvidos a los que han sido sometidos por parte de los gobiernos durante siglos, por el solo hecho de ser diferentes, de ser indígenas. Reclamaban justicia, reconocimiento de la diferencia, de sus particularidades y especificidades, del derecho a ser ellos, respetando sus tradiciones, su historia, su cultura, sus costumbres y su propia identidad. Demandaban, al mismo tiempo, que su pertenencia a la comunidad nacional fuera reconocida, pero no solamente de palabra, sino con hechos, mediante leyes y condiciones que les permitieran e hicieran posible el ejercicio pleno de su ciudadanía, tanto tiempo negada, clausurada (Torres-Ruiz, 2015: 275-276).

No obstante, el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) fue incapaz de asumir los compromisos derivados de los Acuerdos de San Andrés (firmados por el EZLN y el gobierno en 1996) y en cambio desarrolló una “guerra de baja intensidad” en los municipios del estado sureño de Chiapas que contaban con presencia e influencia zapatista, teniendo estas acciones gubernamentales repercusiones en otras regiones del país.

Posteriormente, en 2001, se dio un nuevo intento zapatista por lograr sus cometidos, para ello emprendieron la “Caravana de la Dignidad Indígena” o “La Marcha del Color de la Tierra”. Este largo periplo dio inicio el 24 de febrero de 2001 en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cubriendo 13 estados de la República. Este recorrido, cuya ruta tenía la forma de un caracol, recibió durante los 16 días de trayecto apoyos incontables de la gente, que salía a las calles de sus ciudades a recibir a la Caravana, protegiéndola y escoltándola durante sus recorridos. El apoyo y acompañamiento también provino de agrupaciones civiles y políticas, de estudiantes. Los zapatistas recibían el bastón de mando por parte de las autoridades indígenas de aquellas poblaciones por donde pasaban. Las muestras de respaldo no faltaron, la solidaridad de importantes segmentos de la sociedad mexicana hacia la causa zapatista era palpable y se propagaba. La Caravana culminó su largo viaje el 11 de marzo en la plancha del Zócalo capitalino, donde miles de personas se congregaron para escuchar y ver a los zapatistas.

Sin embargo, a pesar de los amplios apoyos y simpatías ciudadanas, los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del PRI y el PAN aprobaron la contrarreforma indígena, es decir, una ley indígena que no reconocía los Acuerdos y negaba el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Precisamente por esta razón, el EZLN se desilusionó de la clase política y se distanció de ella, comenzando un trabajo de reorganización y fortalecimiento de sus propias comunidades. Esta contrarreforma se dio durante el sexenio de Vicente Fox, quien no hizo nada por respetar los Acuerdos de San Andrés. Como se ha dicho, recordando la aprobación de la ley indígena en abril de 2001,

El desencanto del EZLN ante la cerrazón de los poderes estatales y de la clase política (compuestos por dirigentes de los principales partidos: PAN, PRI, PRD y anexos) desembocó, en Chiapas, en una suerte de repliegue creador que —en un mutismo ensordecedor e inquietante— se dirigió a recomponer el tejido social de las comunidades rebeldes, a reconstruir los municipios autónomos y reforzar incluso su gestión coordinada a través de la creación de las Juntas del Buen Gobierno (JBG) y los Caracoles. Nunca más el EZLN volvería a tener la MENOR expectativa respecto a ninguna fracción de la clase política (para empezar del PRD) ni de las instituciones estatales por ella ocupadas (Anguiano, 2010: 326).

Así, el EZLN fue quizá derrotado por la maquinaria del Estado mexicano, pero logró a la par posicionar los reclamos históricos de los pueblos originarios, subirlos a la agenda nacional y que se reconociera, por parte de las autoridades y de la propia sociedad, el olvido al que han sido sometidos estos grupos y la necesidad de retomar estas problemáticas. Es tiempo todavía en donde los enormes rezagos de las comunidades zapatistas y de las comunidades indígenas en general no han sido debidamente atendidos, pero el hoy de estas comunidades ya no es el mismo que el ayer; algo ha cambiado y las fuertes carencias que las lastiman todos los días son más visibles. Ello se debe fundamentalmente al levantamiento de los zapatistas en el ya lejano 1994. Quizá con el tiempo esto deje de ser solamente visible y comience a convertirse en un proceso de mejoras y transformación para bien de estos grupos.

### **La APPO**

En 2006, con la fuerte movilización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), hubo también decepción; una fuerte derrota de la sociedad movilizada ante el autoritarismo del gobierno mexicano. Recordemos que, en el verano del año 2006, como sucedía casi todos los años, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se reunió en el zócalo de la ciudad de Oaxaca para protestar y comunicar, a través de un pliego petitorio, demandas laborales y sociales

como resultado de sus amplias necesidades y de sus precarias condiciones de trabajo. El entonces gobernador de la entidad, el priista Ulises Ruiz, recurrió al uso de la fuerza pública para reprimir la manifestación y desalojar a los maestros inconformes. Los maestros resistieron la andanada policial. El conflicto creció y muy pronto tomó tintes de gran confrontación entre el gobierno de la entidad; los maestros de la sección 22, a los que se sumaron otras organizaciones sociales y populares de Oaxaca que, junto con el movimiento magisterial, terminaron conformando la APPO.

El conflicto llegó a tal punto que los movilizados exigían la destitución del gobernador Ulises Ruiz, de este modo,

[...] lo que había iniciado simplemente como un conflicto laboral, se convirtió en uno político y, posteriormente, uno social. A partir de entonces y hasta finales de noviembre de 2006, la APPO controló prácticamente la ciudad de Oaxaca. De facto, las autoridades de todos los niveles (municipal, estatal y federal), así como los representantes de los poderes legislativo y judicial, dejaron de ejercer sus funciones (Estrada, 2012: 53).

La respuesta de las autoridades estatales —con el apoyo del gobierno federal— ante estos acontecimientos y las crecientes movilizaciones fue desmedida, brutal. Se presentó una abierta represión a los integrantes de la APPO: tortura, encarcelamientos ilegales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, el movimiento fue desarticulado y las demandas de los inconformes no se atendieron. Pero la experiencia de movilización y lucha; la innovación respecto a los modos de protesta: barricadas, ocupación y operación de emisoras de radio y el canal público de televisión, además de bloqueos de calles, marchas, mítines, etcétera (Garza, 2017: 23-24), que estas organizaciones populares desplegaron a lo largo de meses en Oaxaca, así como su intención de cambiar las relaciones sociales y de construir condiciones para que fuera posible ejercer un poder popular, quedaron ahí plasmadas, en la consigna “todo el poder al pueblo”. Un poder que con certeza fue ejercido efectivamente por un corto tiempo y que logró transmitir un mensaje de que era posible hacer las cosas de otra manera y llevar a cabo una transformación profunda del orden social y político en Oaxaca.

El movimiento de la APPO es, sin duda, uno de los que ha logrado una mayor resonancia no sólo en México, sino a nivel mundial en los últimos años. Quizá una de sus principales aportaciones a la historia de la movilización social en México, como ha señalado Garza (2017: 24), es que la gente salió a las calles y tomó sus propias decisiones, poniéndolas en marcha y recuperando así la capacidad de apropiarse de su vida en el contexto de una protesta social. El propio Garza nos dice que “frente a la negación de las capacidades de los sujetos que resulta en la sociedad capitalista, en la barricada y

en otros momentos de la lucha fueron reapropiadas esas capacidades para decidir, organizar y poner en práctica formas diferentes de relacionarse” (Garza, 2017: 24). Ahí la principal contribución de esta movilización, a pesar de haber sido disuelta y ferozmente reprimida por las estructuras estatales.

### El MPJD

Debido a la violencia desmedida ocasionada por la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado<sup>2</sup> surgió en el 2011 el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Frente a este escenario de violencia incontrolable los ciudadanos indignados salieron a las calles y marcharon, tomaron plazas, se organizaron, sumaron esfuerzos para aportar soluciones. Lo intentaron, aun con un gran dolor a cuestas, con un sufrimiento y un pesar capaces de derrumbar a cualquiera, porque lo que habían perdido, la gran mayoría de los movilizados, era a sus seres más queridos.

El MPJD, bajo el liderazgo de Javier Sicilia,<sup>3</sup> se gestó y desarrolló de 2011 a 2013, buscando construir alternativas ciudadanas para contribuir a la solución del problema. Este movimiento social y sus marchas recurrentes —que son herramientas sociales muy útiles para crear una conciencia crítica entre la población— estimularon la movilización de la sociedad, le permitió sacudirse el miedo que le invadía (con toda razón) ante un panorama tan adverso y sangriento. Ese miedo se transformó en esperanza. Esta movilización sirvió como un catalizador, como el inicio de un contagio de conciencias dispuestas a observar, vigilar, presionar, proponer, exigir cuentas a los gobiernos. La sensibilización de las conciencias ciudadanas permitió entender que la violencia que en ese momento vivía el país —y que hoy continúa viviendo— no nos es ajena, que todos somos víctimas potenciales. Todos estamos implicados en esto y somos parte de la posible solución. Como ha señalado Boaventura De Sousa:

[...] para cambiar las cosas hay que asumir riesgos, hay que tener una voluntad que nace de un impulso de indignación. Y eso tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Nunca he visto a ningún combatiente —sostiene Boaventura— que pueda involucrarse en una lucha por razones totalmente racionales. En un punto de tu vida debe haber cosas que te mueven el corazón y el estómago. Y es a

<sup>2</sup> El 8 de diciembre de 2006, el presidente de México, Felipe Calderón (2006-2012) decidió lanzarse a una guerra sin cuartel contra los cárteles de la droga, sin contar con las herramientas necesarias para salir adelante. No se tenían objetivos claros ni estrategia, ni siquiera se tuvo un diagnóstico puntual de la situación que atravesaba el país respecto a esta problemática (esto inclusive admitido por los propios mandos militares). A pesar de ello, el titular del poder ejecutivo ordenó a las fuerzas armadas comenzar la guerra (así la llamó Calderón) contra el crimen organizado.

<sup>3</sup> Javier Sicilia inició la movilización social a raíz del lamentable y trágico asesinato de su hijo a manos del crimen organizado la noche del 27 de marzo de 2011 en el municipio de Temixco, Morelos. En el movimiento también hubo otros importantes liderazgos y acompañamiento de figuras relevantes a nivel nacional, como Clara Jusidman, Emilio Álvarez Icaza, Julián LeBaron, Miguel Concha Malo, Pietro Ameglio.

partir de esa indignación que tú puedes razonar de una manera distinta, más rica, informada, con la fuerza y la voluntad para transformar el mundo, porque las razones frías pueden contemplarlo, analizarlo, pero no lo cambian.<sup>4</sup>

Los movilizados por la paz, la justicia y la dignidad asumieron riesgos, lucharon denodadamente para abrir el camino de la esperanza, para intentar restituir la dignidad humana. De modo que, ante esa guerra, ante tan aterrador escenario; se presentaban marchas y movilizaciones sociales en donde miles de voces, profundamente sensibilizadas y con la emoción a flor de piel, se unían para exigir paz y justicia en México. Aquí algunas proclamas: “¡No + sangre!”; “¡Estamos hasta la madre!”; “¡Paz con justicia y dignidad!”; “¡Basta!, ¡Las balas matan! ¡El silencio también!”; “Calderón, ¿no puedes? Renuncia”; “Calderón, no seas terco: te equivocaste”; “Presidente, no traiciones al pueblo”; “No todos los padres somos poetas, pero sí todos los hijos son poesía. Todos somos Sicilia”; “¡URGENTE! Se buscan ciudadanos para refundar un país. Ambos sexos. Contratación Inmediata”. Y una espléndida adaptación de unos memorables versos del genial dramaturgo alemán, Bertolt Brecht: “Vinieron los soldados y se llevaron a los campesinos y no nos importó porque nosotros no somos campesinos. Vinieron por los obreros y no nos importó... ahora nos llevan a nosotros, pero ya es demasiado tarde”.<sup>5</sup>

Esas consignas ciudadanas buscaban tocar las fibras más sensibles del poder, también, intentaban que la estrategia instrumentada por Felipe Calderón se reconsiderara y replanteara ante el escenario desolador que se construía en el país. La percepción ciudadana y también la realidad (hacia el final del sexenio de Calderón se contaban más de 100 mil muertos y cerca de 20 mil desaparecidos, más miles de desplazados en toda la República) sostenían que Calderón había equivocado estrepitosamente la estrategia para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.

Lo que ocurrió es que el presidente instrumentó una estrategia fallida, sin contar con un claro diagnóstico de la problemática, sin tener claro el rumbo, lo que encontraría, ni el tamaño y fuerza del enemigo. Tampoco consideró las fuerzas con las que el Estado contaba para afrontar la situación. Calderón decidió sacar al ejército de los cuarteles para combatir a los narcotraficantes, a los criminales; pero esa medida, por sí sola, no solucionaba nada. De manera paralela había que diseñar una estrategia que contemplara acciones dirigidas a corregir los enormes yerros de la política social que han generado ofensivas disparidades entre la población. La desigualdad, la enorme y lacerante

---

<sup>4</sup> Palabras pronunciadas por el sociólogo portugués en el marco del Coloquio Internacional “En la encrucijada del Norte y el Sur”, celebrado el 3 de abril de 2017 en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

<sup>5</sup> El poema titulado *Ellos vinieron* es de la autoría del pastor protestante alemán Martin Niemöller, quien lo pronunció originalmente en un sermón en la Semana Santa de 1946 en la población de Kaiserlautern, en Alemania. No obstante, Cipe Lincovsky, experta en la obra de Brecht, asegura que el escritor alemán escribió el poema en Berlín, en 1933, titulándolo *Primero se llevaron*.

pobreza, la exclusión sistemática de amplios segmentos de la población, la discriminación tan presente en todos los círculos de relacionamiento humano de la sociedad mexicana son componentes que dañan el tejido social y generan violencia; todos ellos quedaron de lado en la estrategia calderonista, no fueron contemplados como factores que, atendiéndolos y corrigiéndolos, eventualmente contribuirían a mejorar la descomposición social. Al final el MPJD se disolvió (o casi) en el 2013 sin grandes logros. La violencia en México continuó lastimando profundamente a la población a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Quizá una victoria del MPJD, que se alcanzó mediante los diálogos llevados a cabo en el Castillo de Chapultepec en julio de 2011, fue que el Congreso de la Unión aprobara la Ley General de Víctimas que creó a su vez la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Esta institución sería la encargada de administrar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas. Todo esto como parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, encargado de elaborar las políticas públicas para la protección, ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas, tanto a nivel federal como a nivel local.

No obstante, esta Ley, que fue promulgada por Enrique Peña Nieto en marzo de 2013, ha funcionado deficientemente y ha experimentado un terrible descuido por parte del gobierno federal, incluso mostrándose incapaz de cumplir con el objetivo de atender a quienes han sido víctimas del crimen o de violaciones a derechos humanos. Esto debido a la deficiente administración de los fondos que brindarían los recursos necesarios para la atención y reparación de los daños a las víctimas. Frente a esto muchas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el CEAV se había convertido en un elefante blanco, absolutamente inoperante (véase García, 2016). Así, aunque el MPJD obtuvo un aparente triunfo, al final los resultados obtenidos son deficitarios, y el Estado demostró que tiene la fuerza suficiente y las herramientas para resistirse a cumplir y satisfacer las exigencias provenientes de distintos grupos sociales.

### **El #YoSoy132**

El 11 de mayo de 2012 en la Universidad Iberoamericana irrumpió un grito de esperanza y libertad de una generación de jóvenes denostados y acusados de ser apáticos e indolentes frente a la política, de no interesarse en los asuntos públicos. En aquella ocasión, la chispa de la insurgencia prendió en los jóvenes estudiantes de la Ibero cuando levantaron la voz para llamar la atención sobre lo que ellos consideraban era la manipulación de la información por parte de Televisa en favor del candidato



presidencial por la Coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto. Fue el rito de iniciación de una generación en la lucha social y política. La movilización comenzó y dejó en claro que esos jóvenes no eran ni apáticos, ni indiferentes a lo que estaba pasando en el contexto político nacional. Para bien de los comicios se presentó esta insurgencia que le dio un nuevo sentido y contenido a una contienda terriblemente descolorida, aburrida, monótona, manipulada.

El movimiento estudiantil #YoSoy132 fue comunicando los sufrimientos, miedos, sueños y esperanzas de sus integrantes, convirtiéndose poco a poco en un actor con cierto poder y con la capacidad de influir en el desarrollo de los comicios, pues logró reorientar, parcialmente, el rumbo de la contienda. Esto lo hizo, además de recurrir al uso imaginativo de las redes sociales, mediante la organización de marchas, mítines, plantones, *performances* afuera de las instalaciones de Televisa, en donde las principales proclamas giraban en torno a la tan necesaria pluralidad y diversidad de los medios de comunicación en la competencia, a lo que miles de estudiantes movilizados demandaban como la *democratización de los medios*. Así, los jóvenes denunciaron ante la opinión pública la indebida intromisión en el proceso electoral por parte de Televisa. El 132 trató con ello de impedir la imposición en la presidencia de la República del candidato priista, un aspirante presidencial que estableció complicidades con la principal televisora del país, la cual se encargó de diseñar una poderosa campaña mediática con la intención de favorecer al mexiquense. Arropado precisamente por esa campaña, “Enrique Peña Nieto representaba entonces a nivel simbólico el personaje mediático por antonomasia, atractivo, joven y siempre sonriente, y encarnaba a la vez, frente a los ojos críticos de muchos mexicanos, la manipulación mediática practicada sistemáticamente por la mediocracia mexicana” (Treré, 2013: 113-114).

Los estudiantes sabían que la televisión en nuestro país seguía siendo el medio de mayor impacto, penetración e influencia entre la opinión de la gente sobre distintos asuntos. Según la ENCUP 2012,<sup>6</sup> la televisión era el medio más utilizado por la gente para informarse de política. De manera que el 76% de la población recurría en ese momento a la televisión para saber qué ocurría en la política, el 5.36% lo hacía a través de los periódicos, el 9.01% utilizaba la radio y únicamente el 4.76% empleaba el Internet. A pesar de la aún limitada utilización y accesibilidad del Internet en la sociedad mexicana en el 2012,<sup>7</sup> los estudiantes del 132 lograron utilizar las redes sociales para lanzar un mensaje a la

<sup>6</sup> Esta encuesta puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: [http://www.encup.gob.mx/en/Encup/Quinta\\_ENCUP\\_2012](http://www.encup.gob.mx/en/Encup/Quinta_ENCUP_2012).

<sup>7</sup> Según la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hasta el mes de abril de 2012 había 40.9 millones de usuarios de Internet y 44.7 millones de usuarios de computadora. El grupo de 12 a 34 años es el que más utiliza Internet, con una participación del 64.1%. Cabe señalar que los usos más recurrentes son la comunicación y la búsqueda de información, con una frecuencia del 60% respectivamente en el total de usuarios. Además, la distribución de usuarios de Internet por género muestra que los hombres tienen una participación del 51.0% y las mujeres del 49.0%. Conviene resaltar que el 26.0% de los hogares del país tenía una conexión a Internet. Y, por último, en México había en ese momento

sociedad que tuvo tal impacto, que incluso los medios tradicionales terminaron por darle seguimiento a la movilización, aunque en muchas ocasiones mostraron un claro sesgo informativo respecto a lo que realmente ocurría en torno a las proclamas, movilizaciones estudiantiles y sus efectos.

En este proceso los jóvenes mostraron no sólo que tenían acceso a las nuevas tecnologías, sino que contaban con la capacidad e imaginación de utilizarlas para movilizarse social y políticamente de forma novedosa. Mediante estas redes horizontales se hizo posible la aparición, o el reforzamiento, de lo que Manuel Castells ha llamado la “autocomunicación de masas” que, “incrementa de forma decisiva la autonomía de los sujetos comunicantes respecto a las empresas de comunicación en la medida en que los usuarios se convierten en emisores y receptores de mensajes” (Castells, 2012: 25). Los sujetos ya no son meros receptores de los mensajes que se envían desde los medios tradicionales de comunicación, son al mismo tiempo constructores y emisores de mensajes que ellos mismos consumen y que también lo hacen otros que interactúan en los espacios de la red. Como ha argumentado Yanina Welp (2016: 419): “La web —y en particular las redes sociales digitales— ofrece un espacio alternativo al de los medios convencionales dominados por el aparato del Estado y/o el discurso restrictivo de intereses dominantes”.

Los estudiantes del 132 lo supieron hacer. Se subieron a la discusión política a partir de mayo de 2012 e inyectaron de vida a unos comicios insípidos, aburridos, poniendo el acento en algo que les parecía ilícito e injusto: el favoritismo político y la manipulación mediática como resultado de la alianza entre Televisa y Peña Nieto. El 132 denunció, como decíamos, que Televisa manipulaba la información y cubría las noticias de tal manera que ayudaba al candidato priista. Con esta denuncia, los medios de comunicación se convirtieron hacia la segunda mitad de la campaña electoral en uno de los temas centrales. Hubo polémica, discusión en torno al papel que los medios venían jugando en la política nacional y que podrían o deberían tener de cara al futuro. Los jóvenes estudiantes apoyados en las redes sociales fueron capaces de sumar nuevas voces, nuevos enfoques ante la pérdida de confianza en los medios tradicionales.

Ahora bien, como ya hemos sostenido, el movimiento fue producto de la coyuntura electoral, pero también respondió a otros aspectos sociales, políticos, económicos que marcan e influyen de manera significativa el desempeño precario de nuestra sociedad, sus pronunciadas brechas entre diversos sectores sociales, sus palpables y lastimosas desigualdades. La simple circunstancia electoral no nos permite explicar este particular fenómeno. El *#YoSoy132* va más allá de lo meramente

---

9.8 millones de hogares equipados con computadora, lo que representaba un 32.2% del total de hogares en el país y significaba un crecimiento de 8.9% en relación con 2011 (INEGI, 2012).

comicial, hay algunas razones de fondo que se vinculan directamente con la protesta estudiantil, como la falta de oportunidades y la manifiesta desigualdad social, además de la percepción entre los jóvenes de que la clase política se aleja cada vez más de ellos, al no tener propuestas concretas sobre las preocupaciones, necesidades y temas de su interés. Es en este malestar en México en general, donde podemos encontrar el origen profundo de la protesta estudiantil de 2012 —aunque claramente los estudiantes también reivindicaban el derecho a la información y la libertad de expresión—.

Éstas fueron algunas de las aportaciones y enseñanzas que dejó el movimiento estudiantil. Ciertamente ganó las elecciones el candidato priista, pero las críticas y señalamientos al régimen y sistema mexicano quedaron ahí. Los estudiantes pusieron el dedo en la llaga e influyeron en algún sentido para que la cultura política de un sector de los mexicanos comenzara un camino de transformación, haciendo que ciertas capas sociales tomaran mayor conciencia de una realidad política corrupta, vertical, autoritaria, excluyente, despreocupada de los pobres y desprotegidos de la sociedad.

#### **“Nos faltan 43...”**

Ayotzinapa es un caso aparte. Sobrecogedor. El 26 de septiembre de 2014 por la noche, México vivió uno de sus episodios más tristes y desgarradores de su historia reciente. En el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, desaparecieron forzosamente 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (la Normal de Ayotzinapa). Las razones, a cuatro años de los acontecimientos, aún no están del todo claras. Pero sin duda, los efectos de tan trágicos sucesos, que “fueron crímenes de Estado y que podrían configurar crímenes de lesa humanidad” (Fazio, 2016: 349), han sido enormes en la sociedad mexicana, y en el derrotero del país. Son un episodio más de la barbarie que se vive en el territorio nacional desde hace ya algunos años, cuando en diciembre de 2006, a los pocos días de asumir la presidencia, Felipe Calderón inició una absurda y descontrolada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Los sucesos de Iguala despertaron grandes reacciones sociales tanto en el ámbito nacional como en el internacional. A los pocos días se detonó un marcado malestar ciudadano que llevó a grandes protestas y manifestaciones en las que miles de connacionales marchaban para exigir la aparición de los estudiantes. Estas acciones colectivas contenciosas se dieron en medio de un contexto de enorme fragilidad institucional y legal en México, en donde, durante los últimos tiempos, se ha deteriorado gravemente el aparato de justicia, quedando a la deriva los derechos ciudadanos a la seguridad, la paz y la integridad. La principal obligación del Estado ha quedado de lado, se ha visto

sumergida en la inoperancia e incapacidad de las autoridades mexicanas a distintos niveles. Hoy, la sociedad mexicana sigue sin saber dónde están los 43 normalistas desaparecidos. La “verdad histórica” construida y difundida tan cínicamente por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en la que afirmaba que los estudiantes estaban muertos y habían sido incinerados, se cayó a pedazos hace tiempo gracias al espléndido trabajo realizado por los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)<sup>8</sup> de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes presentaron en abril de 2016 un informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, dejando de manifiesto en ese documento serias fallas en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas y una clara responsabilidad en los hechos por parte del Estado.

A pesar de que todavía no aparecen los estudiantes normalistas, quizá una de las principales victorias y enseñanzas del Movimiento de Padres de los Normalistas consiste en que han “logrado la adhesión y la solidaridad de numerosas organizaciones en el ámbito nacional y el apoyo y resonancia de sus mensajes en nutridas ciudades del extranjero” (Alzate, 2016: 145). Pero no sólo eso, sino que

La actitud del colectivo de padres de los estudiantes desaparecidos permite destacar la fuerza y voluntad de una de las dimensiones humanas, la de la lucha por la supervivencia y la responsabilidad por la vida misma. Esta es la importancia que tiene el acto de decidirse a la manifestación colectiva, en las circunstancias concretas en las que se dio esta elección frente a la vulnerabilidad de la vida misma. Estos padres y familiares de los estudiantes desaparecidos, rápidamente comprendieron la oportunidad histórica de acciones colectivas masivas, que contaban con una mayoritaria participación de jóvenes estudiantes, altamente sensibilizados y solidarizados por el dolor e indignación de la desaparición de los normalistas (Alzate, 2016: 145).

Huelga decir que, en la actualidad, los mexicanos vivimos en una continua y constante zozobra, atrapados entre dos fuegos y expuestos permanentemente a la violencia sin límites que se detonó en nuestro país por la palmaria incapacidad de los gobernantes panistas y priistas para asumir y cumplir con sus obligaciones. El caso de Ayotzinapa no hace más que constatar la fragilidad institucional en materia de procuración e impartición de justicia, así como la insolvencia estatal para enfrentar y resolver el fenómeno de la violencia; también, la enorme impunidad que permea el ejercicio tanto de

---

<sup>8</sup> Los cinco integrantes del GIEI fueron la colombiana Ángela María Buitrago, doctora en derecho; el chileno Francisco Cox, abogado; el también colombiano Alejandro Valencia, abogado dedicado a la defensa de los derechos humanos; el español Carlos Martín Beristain, médico y psicólogo; y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, jueza y experta en derecho penal.

poder en México, como de las abiertas connivencias, que cada vez más, se establecen entre autoridades legalmente constituidas y el crimen organizado. Todo ello configura un escenario de precariedad democrática en donde los derechos humanos se ven expuestos a la violación sistemática por parte del Estado. Este cuadro genera momentos de gran tensión social, de caos, confusión, de un profundo descontrol y de fuertes sacudidas. A su vez, propicia una creciente desconfianza ciudadana en las instituciones políticas.

Estos atroces acontecimientos, como decíamos, despertaron indignación y grandes movilizaciones nacionales e internacionales, en 2014, 2015, 2016 y aún en 2017, se dieron grandes protestas, marchas, manifestaciones populares encabezadas por los familiares de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa; pero años después seguimos sin saber dónde están los 43 estudiantes normalistas... el Estado navega en la impunidad.

### **A manera de cierre**

Los movimientos sociales que hemos revisado brevemente en estas páginas fueron momentos de extraordinaria disrupción, movilización y fuerza social, pero que no siempre terminaron favorablemente. México tiene una gran tradición de movilización, pero ésta no ha logrado ser muy exitosa en cuanto a que sus demandas sean atendidas debidamente y tampoco respecto a lo que se refiere a la transformación del entorno político, institucional y legal.

Una excepción a esta serie de derrotas de los movimientos sociales en México, lo constituye el amplio movimiento popular contra el desafuero del jefe de gobierno del Distrito Federal, ocurrido entre los meses de febrero y abril de 2005. Este movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador triunfó porque detuvo el desafuero que Vicente Fox y sus aliados querían llevar a cabo. En medio de una historia como la mexicana, donde la lucha y la protesta social han sufrido innumerables descalabros y grandes derrotas a lo largo del tiempo, por la vigorosa y férrea resistencia de las estructuras del Estado y de los actores dominantes, éste es un ejemplo de un movimiento de protesta social exitoso en el México contemporáneo. Por lo menos, puede decirse que su influencia sobre el contexto político fue inmediata. Frente a condiciones siempre adversas, la movilización social antidesafuero emprendida en aquellos meses terminó triunfando (Torres-Ruiz, 2016). En este sentido, es posible sostener que “En buena medida la política de las calles obligó [...] a Vicente Fox Quesada a dar marcha atrás, [...] a su prurito por hacer efectivo un desafuero irrazonable para bloquear la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador” (Meyer, 2016: 97).

Ahora bien, esos momentos de amplia movilización popular que he mencionado —que no son los únicos, pero sí algunos de los más relevantes de los últimos años— no se han traducido, necesariamente, en momentos de desestabilización para el sistema económico neoliberal instaurado en México a partir de los años ochenta, que tanto daño ha causado en materia de agudización de la pobreza y ampliación de la desigualdad, ni tampoco han sido un punto de inflexión para modificar la hegemonía del modelo político representativo que parece no terminar de funcionar. Estas movilizaciones no han sido capaces de propiciar cambios de gobierno o de políticas públicas, ni de incidir en la mejora de las leyes y el buen funcionamiento de las instituciones. No han impactado de manera sustantiva en la construcción de una sociedad más justa, próspera, equitativa, con menos pobreza, en donde la violencia deje de ser un aspecto presente en la vida cotidiana de prácticamente todas las regiones del país, atentando contra la estabilidad social, la tranquilidad y la seguridad de la población, y que provoca conflictividad, fragmentación y caos social, es decir, un profundo y enorme daño al tejido social.

Muchos de los participantes de estos movimientos provienen de nuevas generaciones de militantes de la lucha social, cuya presencia ha sido posible gracias a la permanencia y perseverancia de la movilización social en nuestro país. Por otra parte, es un momento en donde estamos experimentando un cambio de época, un cuestionamiento abierto por parte de amplios sectores de la sociedad a los valores clásicos de la modernidad, y a las estructuras políticas y económicas que con ella se han construido, o que se han actualizado y profundizado en los últimos cuarenta años. Asimismo, estos últimos años podrían ser vistos como la resurrección de la acción colectiva, como el despertar conjunto de uno o varios grupos sociales (fragmentados en México), que se han atrevido a cuestionar al régimen y al modelo económico vigentes, a la cultura política imperante; que han tenido las agallas y la imaginación para demandar derechos, libertades y democracia, mejores condiciones para ejercer los muy diversos y crecientes derechos de ciudadanía; de poner un alto a la violencia; e intentar acabar con la pobreza y la desigualdad.

Los nuevos activistas y movilizados de México intentan contribuir, como ayer lo hicieran estudiantes, obreros, enfermeras, médicos, campesinos o mujeres, a la transformación del sistema político mexicano, a su apertura y verdadera democratización; no únicamente la de la representación, sino la de la participación, deliberación e implicación de los ciudadanos en los procesos donde se construyen y toman decisiones de impacto general. Con estas históricas movilizaciones, se ha buscado acabar con el autoritarismo, se ha cuestionado como nunca la legitimidad del régimen político y se ha luchado por democratizarlo e instaurar tanto libertades como derechos ciudadanos ausentes, muchas veces simulados, cercenados.

Sin embargo, me parece importante señalar que un signo característico de la mayoría de los movimientos sociales que han tenido lugar en México en los últimos tiempos es el de ser reactivos y defensivos frente a ciertas coyunturas, acciones u omisiones específicas por parte del Estado. También se han caracterizado por tener una gran efervescencia, experimentar un descenso más o menos rápido. Crecen, generan amplias simpatías, se dan fuertes movilizaciones, ganan presencia ante ciertas circunstancias desfavorables, frente a coyunturas determinadas; ya sea por un programa o una política pública que el gobierno quiere imponer sin consultar a la población, por un hecho represivo, autoritarismo o por una respuesta abusiva por parte de la policía o el ejército contra un sector de la ciudadanía, por el asesinato de una persona o de un conjunto de personas, por el cambio de una legislación, etcétera. Pero una vez que esto ocurre, viene un descenso importante; los movimientos se disuelven sin lograr los propósitos que los llevaron a la acción. Esas movilizaciones no han logrado generar espacios de encuentro y de propuesta con otras expresiones de lucha y resistencia, no se ha podido edificar una gran confluencia que permita la construcción de un gran movimiento social y político capaz de iniciar una verdadera transformación de las conciencias y del marco legal e institucional que regula (autoritaria, dispereja e inequitativamente) la convivencia de las personas en el país.

Algunos de los movimientos sociales en México (como el zapatismo, el MPJD o el de Ayotzinapa) han querido cambiar o mejorar no sólo las leyes e instituciones de este país, sino las reglas morales que crean relaciones humanas. Desde esas movilizaciones se ha pensado que valía la pena luchar por nuevos valores que hacen falta en la sociedad o que los integrantes de esos movimientos pensaban que hacían falta. Por supuesto, pueden generar cambios sociales y culturales, manifestándose todo ello en nuevas instituciones sociales y políticas, pero no lo han logrado.

Han existido algunos pequeños logros en algunos de estos movimientos, pero en general es posible sostener que el Estado mexicano y sus instituciones han conseguido impedir esos cambios y transformaciones necesarias para mejorar la incipiente democracia mexicana y la calidad de vida de la población.

Pese a ello no debe cejar la movilización social; por el contrario, debe quedar claro que es en la sociedad donde recae la enorme e histórica responsabilidad de encontrar soluciones y darle cauce a la crisis política y social que vive nuestro país. Es en la sociedad donde podemos encontrar la solución a los devastadores problemas que hoy nos presenta la realidad. En estos duros momentos que vive la sociedad mexicana, es tiempo de marchas y amplias manifestaciones sociales como espacios de comunión, de expresión de sentires, como vasos comunicantes de lo social y concientizadores. Es

momento de acciones colectivas, de razones compartidas. De dialogar, escuchar y aprender unos de otros, de mejorar la comunicación. Es el tiempo, también, de cambiar lo vertical por lo horizontal.

El futuro del país, o de su democracia (si eventualmente llegamos a tenerla —o el camino que hemos de recorrer para construirla, en todo caso—) se encuentra en los ciudadanos, en la sociedad independiente, en aquella que no tiene lazos con la descompuesta clase política, con los políticos profesionales que han dado una gran cantidad de señales y muestras de incapacidad, ceguera, indolencia, insensibilidad y desprecio frente a los problemas y tragedias que atosigan al grueso de la población un día sí y el otro también.

Los vientos democráticos han de soplar con fuerza y vendrán de la gente, desde abajo, desde lo más hondo del dolor humano. Ahí habrá de surgir un nuevo país. Si verdaderamente algún día hemos de ver el arribo de la democracia a México, con toda seguridad ésta no vendrá de Palacio, hará su arribo de los campos, de las ciudades, de los estratos sociales más humillados y vilipendiados históricamente, de la indignación ciudadana, de la rabia social; de aquellos que por tantos y tantos años han padecido, o bien la indiferencia de los poderosos, o peor aún, el maltrato y la violencia.

### Referencias bibliográficas

- Alzate Zuluaga, Mary Luz (2017). “Acciones colectivas frente a situaciones de violencia en el México del último lustro. Un análisis desde la decisión y el reconocimiento de sujetos políticos”, en *Análisis político*, núm. 89, enero-abril, 2017, pp. 127-151.
- Anguiano, Arturo (2010). *El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos*. México: Era.
- Bartra, Armando (2019). “Los movimientos sociales como experiencias desnudas”, en Torres-Ruiz, René (coord.). *En busca de la democracia. Pensando la movilización social en tiempos de grandes cambios*. México: Universidad Iberoamericana.
- Castells, Manuel (2017). *Ruptura. La crisis de la democracia liberal*. Madrid: Alianza.
- Castells, Manuel (2012). *Comunicación y poder*. México: Siglo XXI.
- Estrada Saavedra, Marco (2012). “*Vox populi*. La difusión mediática de la protesta de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca”, en Estrada Saavedra, Marco (coord.). *Protesta social. Tres movimientos sociales en clave de la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann*. México: El Colegio de México.
- EZLN: *Documentos y comunicados I* (2003). México: Era.



- Fazio, Carlos (2016). *Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto*. México: Grijalbo.
- García, Imelda (2016). “CEAV, el fracaso”, en *Reporte Índigo*. 17 de octubre de 2016. Disponible en <https://www.reporteindigo.com/reportes/victimas-ceav-secuestro/>. (Consulta: 15 de marzo de 2018).
- Garza, Manuel (2017). “La lucha popular en Oaxaca, diez años después de la APPO”, en Pleyers, Geoffrey y Manuel Garza Zepeda (coords.). *México en movimientos. Resistencias y alternativas*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; M. A. Porrúa; *open movements*.
- Habermas, Jürgen (1998). *Facticidad y validez*. Madrid: Trotta.
- Holloway, John (2017). *Prefacio*, en Pleyers, Geoffrey y Manuel Garza Zepeda (coords.). *México en movimientos. Resistencias y alternativas*. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; M. A. Porrúa; *open movements*.
- Katz, Richard S. and Peter Mair (1995). “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, en *Party Politics*, 1995; 1; 5.
- Kirchheimer, Otto (1980). “El camino hacia el partido de todo el mundo”, en Lenk, Kurt y Franz Neumann (eds.). *Teoría y sociología críticas de los partidos políticos*. Barcelona: Anagrama.
- Lummis, C. Douglas (2002). *Democracia radical*. México: Siglo XXI.
- Mair, Peter (2013). *Ruling the Void. The Hollowing Out of Western Democracy*. London, United Kingdom: Verso.
- Meyer, Lorenzo (2016). *Distopía mexicana. Perspectivas para una nueva transición*. México: Debate.
- Montemayor, Carlos (2009). *Chiapas. La rebelión indígena de México*. México: Random House Mondadori.
- Ortega Ortiz, Reynaldo Yunuen (2010). “El Partido de la Revolución Democrática y los movimientos sociales”, en Bizberg, Ilán y Francisco Zapata (coords.), *Los grandes problemas de México. Volumen VI. Movimientos sociales*. México: El Colegio de México.
- Pleyers, Geoffrey (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI*, Buenos Aires: CLACSO.
- Rosanvallon, Pierre (2007). *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial.

- Salmerón Castro, Fernando I. (2017). “La antropología y el análisis de la violencia”, en Herrera-Laso, Luis (coord.), *Fenomenología de la violencia. Una perspectiva desde México*. México: Siglo XXI.
- Springer, Simon (2016). “The violence of neoliberalism”, en Springer, K. Birch y J. MacLeavy (eds.), *The Handbook of Neoliberalism*. Nueva York: Routledge.
- Tarrow, Sidney (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- Taylor, Charles (1989). “The Liberal-Communitarian Debate”, en Nancy L. Rosenblum (ed.), *Liberalism and the Moral Life*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Tilly, Charles (2004). *Social movements, 1768-2004*. Nueva York: Paradigm.
- Tilly, Charles (1990). “Modelos y realidades de la acción colectiva popular”, en *Zona Abierta*, Madrid, núm. 54-55.
- Torres-Ruiz, René (2016). “Democracy and social movements in Mexico”, en *Open Democracy /ISA RC-47: Open Movements*, 1 December. Disponible en <https://opendemocracy.net/ren-torres-ruiz/democracy-and-social-movements-in-mexico>.
- Torres-Ruiz, René (2015). “El EZLN: una lucha por las libertades y derechos de los pueblos indígenas”, en Bolos Jacob, Silvia, Oscar Alfonso Martínez Martínez y René Torres-Ruiz (coords.), *Procesos socioculturales y políticos. Actores, ciudadanía y democracia*. México: Universidad Iberoamericana.
- Treré, Emiliano (2013). “#YoSoy132: la experiencia de los nuevos movimientos sociales en México y el papel de las redes sociales desde una perspectiva crítica Educación Social”, en *Revista de Intervención Socioeducativa*, núm. 55, pp. 112-121.
- Welp, Yanina (2016). “Cuando todo lo sólido se desvanece en Twitter. Análisis del movimiento social #Yosoy132 (México 2012)”, en *POSTData* 20, núm. 2, Octubre/2015-Marzo/2016, pp. 417-439.